

Este proyecto desde un inicio se manejó en completa opacidad y por lo mismo con un alto grado de riesgo de corrupción en su ejecución, además de que el contrato para construir e instalar toda la plataforma tecnológica se entregó a una empresa que tiene un largo historial de haber aplicado sobrepagos al equipo que vendió en otros estados y ahí es donde entra el gran cuestionamiento que generalmente lo que importa en ese tipo de proyectos es el negocio que se hace en arreglos entre los empresarios y los que les entregan los contratos, en este caso el Gobierno del Estado, a pagar con nuestros recursos públicos.

Otro es el alto costo del proyecto (4,200 millones) del que se ha reservado toda información hasta que concluyan las obras, privándonos a los ciudadanos a conocer el desglose de cada inversión y sus respectivas licitaciones, si es que se llevarán a cabo.

No cabe duda que deben destinarse recursos a la seguridad pública, pero no por encima de la opacidad y endeudando al estado a costa de nuestros impuestos. Chihuahua tiene otras prioridades y la corrupción no es una de ellas pues todo apunta a ello.